

Impacto socioeconómico post pandemia del COVID-19 en los miembros de la Asociación Agrícola Quiroga del Cantón Bolívar

Socioeconomic impact of the COVID-19 pandemic on members of the Quiroga Agricultural Association of Bolívar Canton

Cruz Maria, Falcones Veliz  ; Alexander, Palacios Zurita 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Manabí, Ecuador.

Resumen

La pandemia de COVID-19 generó profundas repercusiones socioeconómicas en el sector rural latinoamericano. Esta investigación evaluó el impacto socioeconómico del virus en 101 socios de la Asociación Agrícola Quiroga, ubicada en el cantón Bolívar, empleando un enfoque metodológico mixto y un diseño de muestreo censal. La recolección de datos se basó en una encuesta estructurada validada previamente, complementada con la aplicación de la matriz de Conesa Fernández para jerarquizar los principales problemas identificados. Los resultados revelan una tasa de contagio del 11,88%, con un gasto sanitario promedio de entre 100 y 500 dólares. Asimismo, el 87,76% de los encuestados percibe ingresos inferiores a un salario básico unificado, condicionados por un bajo nivel educativo donde predomina la educación básica (67,33%). A pesar de esta vulnerabilidad económica, el 52,04% percibe su calidad de vida como buena y el 47,96% regular, demostrando resiliencia familiar frente a la continuidad educativa. Sin embargo, la precariedad estructural se evidenció en la escasez de obras sanitarias estatales y en la imposición de precios por parte de los intermediarios, lo que refleja una marcada ausencia de comercio justo. Se concluye que la comunidad estudiada padece limitaciones estructurales críticas en salud, educación y comercialización, aunadas a una baja efectividad de las políticas públicas y del acompañamiento institucional sostenible. Esto evidencia la urgente necesidad de implementar estrategias de reactivación económica rural orientadas a fortalecer la producción asociativa y garantizar el bienestar socioeconómico de los pequeños agricultores frente a futuras crisis sanitarias o económicas.

Palabras clave: impacto socioeconómico, covid-19, agricultura familiar, vulnerabilidad rural, políticas públicas, comercio justo.

Abstract

The COVID-19 pandemic generated profound socio-economic repercussions in the rural sector. This research evaluated the socio-economic impact of the virus on 101 members of the Quiroga Agricultural Association, located in the Bolívar canton, using a mixed methodological approach and a census sampling design. Data collection was based on a previously validated structured survey, complemented by the application of the Conesa Fernández matrix to prioritize the main problems identified. The results reveal an infection rate of 11.88%, with an average healthcare expenditure between 100 and 500 dollars. Likewise, 87.76% of respondents earn incomes lower than a unified basic salary, conditioned by a low educational level where basic education predominates (67.33%). Despite this economic vulnerability, 52.04% perceive their quality of life as good and 47.96% as regular, demonstrating family resilience regarding educational continuity. However, structural precariousness was evidenced by the scarcity of state sanitary works and the imposition of prices by intermediaries, reflecting a marked absence of fair trade. It is concluded that the studied community suffers from critical structural limitations in health, education, and commercialization, coupled with low effectiveness of public policies and sustainable institutional support. This highlights the urgent need to implement rural economic reactivation strategies aimed at strengthening associative production and guaranteeing the socio-economic well-being of small farmers facing future health or economic crises..

Keywords: socioeconomic impact, covid-19, family farming, rural vulnerability, public policies, fair trade.

Recibido/Received	21-07-2025	Aprobado/Approved	06-09-2026	Publicado/Published	06-09-2026
-------------------	------------	-------------------	------------	---------------------	------------

Introducción

A principios de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó la pandemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Este fenómeno desencadenó efectos socioeconómicos globales profundos y una ruptura estructural en el sistema financiero. En consecuencia, la estabilidad financiera global se vio alterada por la incertidumbre de los mercados y una desaceleración económica que golpeó severamente a los sectores productivos (García-Iglesias & Gómez-Salgado, 2020). Tales sistemas evidenciaron debilidades críticas al gestionar la crisis, manifestadas en la reducción de la inversión y alteraciones en el comercio internacional. Así, la fragilidad de los mecanismos financieros quedó expuesta ante las exigencias de la crisis sanitaria (Martelo Gómez et al., 2022).

En este contexto de inestabilidad, el sistema agroalimentario global experimentó fracturas que exacerbaban la vulnerabilidad de los sectores rurales y las organizaciones agropecuarias. Estas entidades enfrentaron restricciones en su capacidad operativa debido a las limitaciones de movilidad y producción. Al respecto, Rodríguez-Baeza et al. (2025) señalan que una proporción significativa de productores agrícolas sufrió carencias en insumos, mano de obra y comercialización. Estos eventos demostraron que las cadenas agroalimentarias dependen de modelos tradicionales escasamente sostenibles. Como sostiene Hobbs (2021), la crisis pandémica reveló fisuras críticas en los sistemas de distribución que comprometen la resiliencia alimentaria ante choques externos.

Paralelamente, las asociaciones agrícolas enfrentaron una contracción de la demanda que derivó en la pérdida de ingresos y el incremento de la desigualdad rural. Por ejemplo, diversas cooperativas en el sudeste africano entraron en inactividad al no poder mitigar las perturbaciones del mercado por la falta de capital de gestión (Francesconi et al., 2021). La prohibición de reuniones presenciales afectó la toma de decisiones colectivas, debilitando los vínculos con los mercados locales. Ante esta realidad, surge la necesidad de que las organizaciones comunitarias generen soluciones prácticas basadas en circuitos de suministro cortos. Según Aday y Aday (2020), la flexibilidad en la cadena de suministro es determinante para responder a los desafíos alimentarios contemporáneos.

No obstante, la agricultura familiar demostró niveles de resiliencia al mantener el empleo rural y atraer fuerza laboral urbana durante el confinamiento. Para Tiftonell et al. (2021), la pandemia subrayó el rol estratégico de los sistemas locales y la urgencia de fortalecerlos mediante políticas públicas orientadas a la soberanía alimentaria. En el caso de Ecuador, la crisis sanitaria impactó de forma diferenciada a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (OEPS). Zambrano et al. (2024) indican que la cadena del cacao sufrió disrupciones que redujeron los ingresos de los pequeños productores. Asimismo, el encarecimiento de insumos y las dificultades logísticas debilitaron el tejido social y comercial de estas agrupaciones.

Bajo estas consideraciones, la presente investigación analiza el caso de la Asociación Agrícola Quiroga, situada en el cantón Bolívar, provincia de Manabí. Sus miembros han enfrentado la precariedad laboral y limitaciones administrativas mediante la persistencia en estructuras de escasos recursos. Dada la importancia de esta organización para el desarrollo territorial, se requiere un diagnóstico integral de su situación socioeconómica. El estudio busca identificar vulnerabilidades específicas para proponer estrategias que fortalezcan la sostenibilidad de las asociaciones rurales. Este enfoque se alinea con la visión del International Monetary Fund (2000), que destaca la infraestructura social y productiva como pilares de bienestar ante choques externos.

Finalmente, el análisis del desarrollo endógeno sugiere que la asociatividad voluntaria robustece la capacidad de negociación de los pequeños productores. Autores como Russo et al. (2023) defienden que el poder de contrapeso de las iniciativas colectivas mitiga las prácticas comerciales injustas en las cadenas de valor. Sin embargo, factores como el relevo generacional, el acceso a tecnología y la equidad de género determinan la viabilidad de estos procesos (Cornejo, 2020). Por ello, es imperativo combinar indicadores económicos y sociales para construir un panorama holístico del sector rural (Abreu & Mesias,

Falcones Veliz, C. M., & Palacios Zurita, A. (2026). Impacto socioeconómico post pandemia del COVID-19 en los miembros de la Asociación Agrícola Quiroga del Cantón Bolívar. *e-Revista Multidisciplinaria Del Saber*, 4, e-RMS08082026. <https://doi.org/10.61286/e-rms.v4i.505> 2020). Esta investigación contribuye a dicha comprensión mediante un análisis empírico y contextualizado de la realidad asociativa pospandemia.

Materiales y métodos

El estudio adoptó un enfoque mixto, que combina técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener un análisis integral de la situación socioeconómica de la Asociación Agrícola Quiroga, utilizando diseños de investigación exploratorio, de campo y descriptivo. Para la recolección de datos se aplicaron métodos inductivos, analítico-sistemático.

Se aplicó como técnica la encuesta estructurada y validada por Bermúdez et al (2024), misma que fue aplicada al total de la población de la asociación, teniendo un muestreo censal de 101 socios, así también se aplicó el análisis estadístico inferencial para la interpretación de los resultados.

Para el análisis de los problemas detectados en la investigación durante los tres períodos de confinamiento se utilizó la matriz de Conesa Fernández con su versión simplificada (Bernal, 2022), para determinar cuál de estos problemas genera mayor o menor impacto en la Asociación. Esta matriz presenta diez criterios cualitativos y se detallan en la tabla 1, los criterios se calificaron de manera independiente por la autora, posteriormente se calcularon los promedios de los puntajes asignados y obtener el valor de importancia del impacto por cada problema identificado, haciendo uso de la fórmula:

$$I = \pm [3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]$$

De acuerdo a la metodología de Conesa, en la ecuación el signo positivo o negativo indica si el impacto es beneficioso o perjudicial, considerando que todos los problemas identificados son perjudiciales se utilizó el signo del cálculo negativo.

Tabla 1. Criterios y rangos para evaluar la matriz de Vicente Conesa

Criterios	Significado	Rango	Calificación
Positivo (+)	Alusión de las distintas acciones.	Impacto benéfico	+
Negativo (-)		Impacto perjudicial	-
Intensidad (IN)	Grado de incidencia de la acción.	Baja	1
		Media	2
		Alta	4
		Muy alta	8
		Total	12
Extensión (EX)	Área de influencia teórica del impacto.	Puntual	2
		Parcial	2
		Extensa	4
		Total	8
		Crítica	+4
Momento (MO)	Alude el tiempo entre la aparición de la acción	Largo plazo	1
		Medio plazo	2
		Inmediato	4
		Crítico	+4
Persistencia (PE)	Tiempo que permanecerá el efecto.	Fugaz	1
		Temporal	2
		Permanente	4
Reversibilidad (RV)	Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales.	Corto plazo	1
		Mediano plazo	2
		Irreversible	4
Recuperabilidad (MC)	Posibilidad de reconstrucción total o parcial.	Inmediato	1
		Medio plazo	2
		Mitigable o compensable	4
		Irrecuperable	8
Sinergia (SI)	Reforzamiento a dos o más efectos simples	Sin sinergismo (simple)	1
		Sinérgico	2
		Muy sinérgico	4
Acumulación (AC)	Incremento progresivo del impacto.	Simple	1
		Acumulativo	4
Efecto (EF)	Relación causa-efecto.	Indirecto (secundario)	1
		Directo	4
Periodicidad (PR)	Regularidad de la manifestación.	Irregular o aperiódico	1
		Periódico	2
		Continuo	4

Para la jerarquización de las problemáticas identificadas según su nivel de criticidad, se empleó la metodología de Conesa (2003), citada por Bernal (2022), la cual permite categorizar los impactos en función de su urgencia y viabilidad de resolución. Este procedimiento técnico facilita a la asociación la adopción de decisiones estratégicas oportunas, optimizando la gestión hacia las áreas de mayor vulnerabilidad. De acuerdo con este modelo, los resultados se segmentan en cuatro niveles de impacto: compatibles ($NI \leq 25$), moderados ($25 < NI \leq 50$), severos ($50 < NI \leq 75$) y críticos ($NI > 75$), permitiendo una visualización estructurada del grado de afectación socioeconómica.

Resultados

En estricto cumplimiento de los estándares bioéticos internacionales, se garantizó la autonomía y libre participación de los 101 socios de la Asociación Agrícola Quiroga del cantón Bolívar, respetando su derecho a la reserva de información según los lineamientos de la CIOMS (2016). El contexto de estudio estuvo marcado por el impacto de la COVID-19 en una comunidad rural caracterizada por un déficit de infraestructura sanitaria, lo cual incrementó la vulnerabilidad de niños y adultos mayores ante patologías comunes. La caracterización sociodemográfica de la muestra revela una predominancia del género masculino (86,00%) y una concentración etaria significativa en el rango de 46 a 65 años (55,00%), mientras que la base económica se sustenta primordialmente en la producción agropecuaria (73,00%) y agrícola (23,00%).

Respecto a la dimensión laboral, los datos consolidados en la Tabla 2 muestran que la ocupación se mantuvo resiliente a pesar de la crisis, con un 97,03% de socios activos antes de la pandemia, un 96,04% durante el confinamiento y un 98,02% en el periodo posterior. La actividad agrícola y pecuaria constituye el núcleo productivo para el 70,41% de los integrantes, labor que se desarrolla en estructuras familiares amplias donde, en el 79,21% de los hogares, trabajaban inicialmente entre 1,00 y 2,00 personas (ver Tabla 2). El análisis longitudinal refleja que sectores como el servicio público (13,27%) y el trabajo doméstico (12,24%) no presentaron variaciones en su participación porcentual a lo largo de las tres etapas evaluadas, como se desglosa en la Tabla 2.

Tabla 2. Dimensión trabajo y económica

Dimensión trabajo						
Situación laboral	Antes		Durante		Después	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
• Si	98	97,03	97	96,04	99	98,02
• No	3	2,97	4	3,96	2	1,98
Principal actividad laboral						
• Trabajador dependiente sector público	13	13,2%	13	13,27	13	13,27
• Trabajador independiente sector privado	3	3,06	3	3,06	3	3,06
• Trabajador doméstico	12	12,24	12	12,24	12	12,24
• Trabajador agrícola/pecuario	69	70,41	69	70,41	69	70,41
• Tenía un propio negocio y empleaba a otras personas	1	1,02	1	1,02	1	1,02
• Tenía un propio negocio sin emplear a otras personas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Personas que laboraban en el hogar						
• 1 a 2 personas	80	79,21	81	80,20	81	80,20
• 3 a 4 personas	16	15,84	16	15,84	16	15,84
• Más de 4 personas	5	4,95	4	3,96	4	3,96
Dimensión Económica						
Cargas familiares	Antes		Durante		Después	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
• 0	6	5,94	6	5,94	6	5,94
• 1 o 2	71	70,30	71	70,30	71	70,30
• más de dos	24	23,76	24	23,76	24	23,76
Ingreso promedio mensual						
• Menor a un Salario Básico Unificado (SBU)	86	87,76	86	87,76	85	86,73
• Mayor o igual a 1 SBU \$425,00 y menor a 2 SBU \$850,00	12	12,24	12	12,24	13	13,27
Forma de vida con ingresos percibidos						
• Vive bien	51	52,04	51	52,04	51	52,04
• Vive más o menos bien	47	47,96	47	47,96	47	47,96
Ahorro de dinero						
• Apenas logra equilibrar sus ingresos y gastos	87	88,78	87	88,78	88	89,80
• Se ve obligado a gastar los ahorros	11	11,22	11	11,22	10	10,20
Acciones realizadas en el hogar						
• Dejó de pagar algún crédito en banco(s)	0	0,00	0	0,00	1	1,02
• Dejó de pagar la renta	0	0,00	2	2,04	1	1,02
• Dejó de pagar los servicios (luz, agua, teléfono)	0	0,00	57	58,16	41	41,84
• Pidió prestado a familiares o amigos	1	1,02	0	0,00	0	0,00

En la dimensión económica, la investigación determinó que el 70,30% de los socios posee entre 1,00 y 2,00 cargas familiares, lo que presiona ingresos que, en el 87,76% de los casos, se situaron por debajo de un salario básico unificado (SBU) antes y durante la emergencia (Tabla 2). Esta precariedad monetaria se asocia a brechas educativas estructurales, donde la escolaridad rural promedio de 7,20 años contrasta con los 11,30 años del sector urbano según cifras del INEC (2019). Ante la falta de liquidez, las estrategias de subsistencia incluyeron el impago de servicios básicos por parte del 58,16% de los hogares durante el confinamiento y el uso de ahorros personales en el 11,22% de la muestra, indicadores que evidencian la fragilidad financiera del sector rural frente a choques externos, detallados íntegramente en la Tabla 2.

Los resultados detallados en la Tabla 3 demuestran que la mayoría de los participantes cuenta con vivienda propia, representando el 88,42% de la muestra, lo que proporcionó una base de estabilidad habitacional durante la crisis sanitaria. Sin embargo, se identifica un impacto económico directo en la capacidad de pago de servicios básicos durante el periodo de confinamiento. El dato más significativo en este rubro es que 66 socios suspendieron el pago de energía eléctrica y 24 el de internet, lo que indica una jerarquización de gastos donde se dio absoluta prioridad a la alimentación sobre los servicios del hogar, los cuales regresaron a la normalidad una vez superada la fase crítica.

Tabla 3. Dimensiones vivienda, salud y educación

VIVIENDA							
		Antes		Durante		Después	
Arrendamiento de vivienda		Nº	%	Nº	%	Nº	%
• Si		6	5,94	6	5,94	6	5,94
• No		95	94,06	95	94,06	95	94,06
Incumplimiento de pago de alquiler							
• Si		1	16,67	1	16,67	1	16,67
• No		5	83,33	5	83,33	5	83,33
Vivienda propia							
• Si		84	88,42	84	88,42	84	88,42
• No		11	11,58	11	11,58	11	11,58
Hipoteca de vivienda							
• Si		0	0,00	2	2,38	0	0,00
• No		84	100,00	82	97,62	84	100,00
Servicios básicos							
• Agua potable		0	0,00	5	5,10	0	0,00
• Energía eléctrica		0	0,00	66	67,35	0	0,00
• Telefonía fija		0	0,00	0	0,00	0	0,00
• Telefonía móvil		0	0,00	3	3,06	0	0,00
• Internet		0	0,00	24	24,49	0	0,00
SALUD							
Contagio por COVID-19							
• Si		0	0,00	12	11,88	2	1,98
• No		101	100,00	89	88,12	99	98,02
Fallecimiento por COVID-19 entre familiares							
• Si		0	0,00	3	3,16	0	0,00
• No		0	0,00	92	96,84	0	0,00
Gasto por contagio de COVID-19							
• 100-500		0	0,00	11	91,67	2	100,00
• 501-1000		0	0,00	1	8,33	0	0,00
Afiliación							
• Seguro del ISSFA		1	1,02	1	1,02	1	1,02
• Seguro Social		97	98,98	97	98,98	97	98,98
EDUCACIÓN							
Estado de estudio							
Yo	Si	4	3,96	2	1,98	1	0,99
	No	97	96,04	99	98,02	100	99,01
Pareja	Si	2	5,00	1	2,50	2	5,00
	No	38	95,00	39	97,50	38	95,00
Hijos	Si	71	94,67	69	92,00	71	94,67
	NO	4	05,33	6	8,00%	4	5,33
Interrupción del estudio							
Yo	No	4	100,00	2	100,00	1	100,00
	Si	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pareja	No	2	100,00	1	100,00	2	100,00
	Si	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hijos	Si	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	NO	71	100,00	69	100,00	71	100,00

En lo que respecta a la dimensión de salud, la Tabla 3 muestra que el nivel de contagio por COVID-19 entre los socios fue del 11,88% durante la pandemia, con una afectación mínima en cuanto a fallecimientos familiares, situándose en un 3,16%. Un factor determinante para la seguridad social de este grupo es que el 98,98% se encuentra afiliado al Seguro Social Campesino, lo cual constituye su principal mecanismo de protección frente a enfermedades y accidentes. En el ámbito económico de la salud, la mayoría de los socios afectados reportó gastos contenidos entre 100 y 500 dólares para el tratamiento de la enfermedad, lo que sugiere una dependencia de la red pública de salud.

Finalmente, el análisis de la educación en la Tabla 3 refleja una realidad estructural compleja, donde el 67,33% de los socios posee únicamente instrucción básica, evidenciando las limitaciones de formación en las zonas rurales. Pese a este escenario, se observa un esfuerzo por mantener la continuidad educativa de las nuevas generaciones, ya que el 94,67% de los hijos de los asociados permaneció en el sistema escolar antes y después de la pandemia. Es relevante señalar que no se reportaron interrupciones definitivas en los estudios gracias a las modalidades de trabajo autónomo implementadas en el sector rural, lo que evitó que la crisis sanitaria derivara en una deserción escolar masiva. Los datos analizados sobre las dimensiones vivienda y salud se muestran en la Tabla 3. Sobre la pregunta a los socios en cuanto al arriendo de vivienda antes, durante y después el 94,06 que representa a 95 socios indicaron que no rentaban vivienda, es decir su vivienda era propia o vivían con familiares, ya que en las zonas rurales la mayoría de familias son propietarias de sus terrenos y casas o son heredadas, mientras que el 5,94% (6) si rentaban vivienda, considerando que en el análisis de la actividad principal laboral el 16% de los socios mantienen trabajo en el sector público y privado, esto hace que algunos socios deben vivir fuera de su comunidad algunos días, de estas personas solo el 16,67% (1) incumplió con el pago de su alquiler.

En la dimensión ocio y relaciones sociales, las horas dedicadas a la familia no existe variación en los tres tiempos de estudio, es decir antes, durante y después los socios dedicaban de 6 a 8 horas semanales a su familia con un 62,38% que representa a 63 socios y el 34,65% que representa a 35 socios dedicaba de 4 a 5 horas, y tres socios dedicaban más de 9 horas a la semana, en su gran mayoría los socios han permanecido cerca de su familia debido a su labor agrícola en sus comunidades.

Tabla 4. Dimensión ocio y relaciones sociales, bienestar subjetivo

OCIO Y RELACIONES SOCIALES							
		Antes		Durante		Después	
Horas dedicadas actividades en familia		Nº	%	Nº	%	Nº	%
-De 4 a 5 horas semanales		35	34,65	35	34,65	35	34,65
-De 6 a 8 horas semanales		63	62,38	63	62,38	63	62,38
-De 9 a 12 horas semanales		2	1,98	2	1,98	2	1,98
- Más de 12 horas semanales		1	0,99	1	0,99	1	0,99
BIENESTAR SUBJETIVO							
Emociones frecuentes							
Yo	Tristeza	73	72,28	50	49,50	4	3,96
	Miedo	26	25,74	60	59,41	2	1,98
	Enfado	1	0,99	9	8,91	0	0,00
	Aburrimiento	1	0,99	2	1,98	2	1,98
	Preocupación	0	0,00	17	16,83	0	0,00
Pareja	Tristeza	73	72,28	50	49,50	4	3,96
	Miedo	25	24,75	58	57,43	1	0,99
	Enfado	1	0,99	9	8,91	0	0,00
	Aburrimiento	1	0,99	2	1,98	0	0,00
	Preocupación	0	0,00	17	16,83	0	0,00
Hijos	Tristeza	61	60,40	45	44,55	2	1,98
	Miedo	24	23,76	54	53,47	1	0,99
	Enfado	1	0,99	8	7,92	2	1,98
	Aburrimiento	1	0,99	2	1,98	0	0,00
	Preocupación	0	0,00	12	11,88	0	0,00
DIMENSIÓN SEGURIDAD							
Emociones frecuentes							
Yo	No he/hemos sufrido violencia	101	100,00	101	100,00	101	100,00
Pareja	No he/hemos sufrido violencia	101	100,00	101	100,00	101	100,00
Hijos	No he/hemos sufrido violencia	101	100,00	101	100,00	101	100,00

Haciendo referencia a las emociones que han experimentado durante el COVID-19, antes el 72,28% (73) de los socios sentían tristeza y miedo el 25,74% (26), durante la pandemia el 49,50% (50)

sentía tristeza, el miedo aumentó al 59,41% (60) y el 16,83% (17) de las personas indicaron sentir preocupación, un 8,91 (9) sintieron enfado; después del confinamiento estas emociones bajaron considerablemente en tristeza 3,96% (4) y el miedo al 1,98% (2), entre sus parejas e hijos según la tabla 6 antes y durante prevalecen emociones de tristeza, miedo y preocupación, después del confinamiento estas emociones bajan de forma significativa dando paso al desarrollo normal de sus actividades. En la dimensión seguridad los socios manifestaron que en ningún momento ellos, sus parejas o sus hijos pasaron por momentos de violencia.

En referencia a las acciones gubernamentales para contribuir a la salud en las comunidades pertenecientes a la Asociación Quiroga (Tabla 5), antes el 48,51% (49) de los socios indicaron recibir apoyo del Ministerio de Salud Pública, durante el 49,50% (50) y después con un 50,50 (51); menos del 8% de los socios mencionaron recibir apoyo del GAD parroquial, municipal y provincial, y más del 40% de los socios indicaron que no recibieron acción alguna por otro ente del gobierno en materia de salud. Los socios también manifestaron recibir ayuda por parte de otras instituciones gubernamentales diferentes al Ministerio de Salud Pública antes con un 4,95% (5), durante un 5,94% (6) y después el 3,96% (4).

En la dimensión productividad, el abastecimiento de agua para el riego de la producción agrícola, los socios durante los tres períodos de estudio indicaron que el 52,48% (53) utilizan agua de pozo, el 39,60% (40) hace uso del sistema de riego público y el 7,92% (8) riegan sus sembríos con agua de río. En cuando a la imposición del precio de venta de acuerdo información proporcionada por sus socios lo establece el comprador, puesto que estos suelen tener el poder de negociación y controlan el mercado, en especial cuando los productores son pequeños productores y estos quedan sujetos a sus condiciones.

Tabla 5. Dimensión gobierno y productividad

GOBIERNO						
Acciones gubernamentales en salud	Antes		Durante		Después	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
GAD parroquial	2	1,98	3	2,97	4	3,96
GAD municipal	4	3,96	8	7,92	7	6,93
GAD provincial	0	0,00	0	0,00	1	0,99
MSP	49	48,51	50	49,50	51	50,50
Institución gubernamental diferente al MSP	5	4,95	6	5,94	4	3,96
No se realizó ninguna acción	41	40,59	34	33,66	34	33,66
PRODUCTIVIDAD						
Abastecimiento de agua para riego						
Agua de pozo	53	52,48	53	52,48	53	52,48
Sistema de riego público	40	39,60	40	39,60	40	39,60
Río	8	7,92	8	7,92	8	7,92
Imposición del precio de venta						
El comprador	101	100,00	101	100,00	101	100,00

La evaluación de los problemas identificados mediante la matriz de Conesa Fernández, detallada en la Tabla 6, revela que las dimensiones de mayor criticidad para los socios son la económica y la de productividad. En ambos casos, se registra un nivel de impacto severo con puntuaciones de -62 y -64 respectivamente, las cuales se mantienen constantes antes, durante y después de la pandemia. El hecho de que la percepción de ingresos inferiores a un Salario Básico Unificado y la imposición de precios de venta por parte de los compradores no hayan variado su severidad, indica que el COVID-19 no creó estos problemas, sino que profundizó una precariedad estructural ya existente en el modelo de comercialización agrícola y en la capacidad de generación de riqueza de las familias rurales.

En lo que respecta a las dimensiones de salud, educación y gestión gubernamental, la Tabla 6 muestra hallazgos significativos que alcanzan niveles de impacto severo. El aumento de contagios por COVID-19 durante el confinamiento obtuvo una valoración de -60, mientras que el alto porcentaje de socios con formación básica alcanzó un -58. Resulta particularmente relevante la evaluación de la gestión del gobierno respecto a la asistencia en salud en zonas rurales, la cual mantiene un impacto severo de -51 en los tres periodos analizados. Este dato sugiere una percepción de abandono estatal crónico que no fue mitigado por las medidas de emergencia sanitaria, consolidándose como una debilidad institucional persistente para la comunidad.

Finalmente, las dimensiones de vivienda y bienestar subjetivo presentan una afectación calificada como impacto moderado según los criterios de la Tabla 6. Las limitaciones para el pago de servicios básicos, específicamente la energía eléctrica, registraron una puntuación de -29 durante y después de la crisis, situándose dentro del rango moderado pero cercano al umbral de compatibilidad. De igual manera, el aumento de emociones negativas como tristeza, miedo y preocupación se mantuvo en un nivel de -31. Estos resultados permiten concluir que, si bien la pandemia generó un malestar emocional y dificultades logísticas en el hogar, el núcleo de la problemática socioeconómica radica en las barreras estructurales de ingresos y educación previamente mencionadas.

Tabla 6. Matriz de impacto Conesa

DIMENSIÓN	PERIODO DE CONFINAMIENTO	PROBLEMA IDENTIFICADO	IN	EX	MO	PE	RV	MC	SI	AC	EF	PR	I	NI
ECONÓMICA	ANTES	Ingresos inferiores a un SBU	8	4	4	4	2	4	4	4	4	4	-62	Impacto severo
	DURANTE	Ingresos inferiores a un SBU	8	4	4	4	2	4	4	4	4	4	-62	Impacto severo
	DESPUÉS	Ingresos inferiores a un SBU	8	4	4	4	2	4	4	4	4	4	-62	Impacto severo
VIVIENDA	DURANTE	Limitaciones para pagar servicios básicos (energía eléctrica)	4	2	2	2	2	2	1	1	1	2	-29	Impacto moderado
	DESPUÉS	Limitaciones para pagar servicios básicos (energía eléctrica)	4	2	2	2	2	2	1	1	1	2	-29	Impacto moderado
SALUD	DURANTE	Aumento de contagio por COVID-19	8	4	4	4	2	4	4	4	4	2	-60	Impacto severo
EDUCACIÓN	DATOS EN ÚNICO MOMENTO	Alto porcentaje de socios con formación básica	8	4	2	4	2	4	2	4	4	4	-58	Impacto severo
BIENESTAR SUBJETIVO	ANTES	Aumento de emociones de tristeza, miedo	4	2	2	2	2	2	1	1	4	1	-31	Impacto moderado
	DURANTE	Aumento de emociones de tristeza, miedo y preocupación	4	2	2	2	2	2	1	1	4	1	-31	Impacto moderado
GOBIERNO	ANTES	Escasa asistencia en salud a las zonas rurales	8	4	2	2	2	2	1	4	4	2	-51	Impacto severo
	DURANTE	Escasa asistencia en salud a las zonas rurales	8	4	2	2	2	2	1	4	4	2	-51	Impacto severo
	DESPUÉS	Escasa asistencia en salud a las zonas rurales	8	4	2	2	2	2	1	4	4	2	-51	Impacto severo
PRODUCTIVIDAD	ANTES	Imposición del precio de venta por el comprador	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-64	Impacto severo
	DURANTE	Imposición del precio de venta por el comprador	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-64	Impacto severo
	DESPUÉS	Imposición del precio de venta por el comprador	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-64	Impacto severo

Nivel de impacto (NI): Impactos compatibles ≤ 25 ; Impactos moderados >25 y ≤ 50 ; Impactos severos >50 y ≤ 75 ; Impactos críticos >75

Discusión

La crisis sanitaria global provocada por la COVID-19 no solo representó un desafío epidemiológico, sino que desnudó las profundas fragilidades estructurales de las comunidades rurales. En el caso de la Asociación Agrícola Quiroga, los resultados obtenidos a través de la matriz de evaluación Conesa evidencian un impacto severo en la dimensión económica, con una valoración constante de -62 en los tres periodos analizados. Esta rigidez en la afectación sugiere que la pandemia no fue la causa originaria de la precariedad, sino un factor que intensificó condiciones preexistentes. Según Rosero y Mideros (2023), el empobrecimiento por ingresos en Ecuador está intrínsecamente ligado a la estructura del mercado laboral y la informalidad. En este sentido, la incapacidad de los socios para alcanzar un Salario Básico Unificado (SBU) antes de la emergencia ya configuraba un escenario de vulnerabilidad estructural.

Bajo esta perspectiva, es imperativo reconocer que la economía rural opera frecuentemente al margen de las redes de protección formal, lo que limita la capacidad de respuesta ante choques externos. La Tabla 2 confirma que el 87,76% de los hogares percibía ingresos menores al SBU, una cifra que apenas

varió durante la crisis. Esta resiliencia negativa coincide con los planteamientos del Banco Mundial (2024), donde se señala que la pobreza rural en Ecuador alcanzó niveles críticos, exacerbada por una dependencia de trabajos agrícolas con baja remuneración. La informalidad, más que una elección, se presenta como un mecanismo de supervivencia frente a un mercado que no garantiza precios justos para la producción primaria. Por tanto, la estabilidad de los indicadores económicos negativos refleja un estancamiento que demanda intervenciones que trasciendan la asistencia temporal.

Como consecuencia de esta fragilidad financiera, las estrategias de subsistencia de los asociados se centraron en la jerarquización del gasto doméstico durante los momentos de mayor restricción. Durante el periodo de confinamiento, se observó que el 58,16% de los hogares recurrió al impago de servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, según se detalla en la Tabla 2. Este fenómeno es interpretado como una respuesta racional ante la iliquidez, priorizando la seguridad alimentaria sobre los costos fijos de vivienda. Hobbs (2021) sostiene que la resiliencia de la cadena de suministro y la economía del hogar se ven comprometidas cuando las restricciones de movilidad interrumpen los flujos de efectivo. En la Asociación Quiroga, la falta de una cultura de ahorro obligó a los socios a sacrificar la continuidad de los servicios básicos.

Enlazado con lo anterior, la dimensión de salud presentó un impacto severo valorado en -60, debido fundamentalmente al aumento de contagios y la precariedad de la infraestructura sanitaria rural. No obstante, los datos muestran que el nivel de contagio local fue del 11,88%, cifra significativamente menor a la reportada en centros urbanos densamente poblados. Este hallazgo es consistente con las observaciones de Serrano y Fajardo (2023), quienes sugieren que la baja densidad demográfica y el trabajo al aire libre funcionaron como barreras naturales. A pesar de esta ventaja geográfica, la vulnerabilidad se manifestó en el acceso a medicina y atención especializada, evidenciando que la dispersión poblacional dificulta la prestación de servicios públicos. La falta de hospitales cercanos obligó a los socios a gestionar la enfermedad bajo condiciones de aislamiento institucional.

Complementariamente, el estudio de Morales-Jadán et al. (2023) sobre comunidades indígenas y mestizas andinas reportó una tasa de infección del 26,2%, lo que pone en contexto la situación local. La Tabla 3 refleja que la mayoría de los socios (98,98%) depende del Seguro Social Campesino, un pilar fundamental para la estabilidad social. Sin embargo, la dimensión de gobierno mantuvo un impacto severo debido a la percepción de escasa asistencia estatal y falta de obras sanitarias. Este déficit institucional obliga a los habitantes rurales a enfrentar emergencias con recursos propios, lo que incrementa el gasto de bolsillo en salud. Esta realidad subraya la necesidad de fortalecer el sistema de salud primaria en los sectores periféricos para reducir la inequidad sanitaria y mejorar la respuesta comunitaria.

En relación con el bienestar emocional, la Tabla 4 indica que la pandemia provocó un desplazamiento significativo en las emociones frecuentes de los asociados y sus familias. El miedo alcanzó al 59,41% de los socios, una respuesta psicológica coherente con la incertidumbre económica y el riesgo sanitario inminente. García-Iglesias et al. (2020) destacan que los periodos de crisis prolongados deterioran la salud mental, especialmente en poblaciones con escaso apoyo institucional. A pesar de esto, el bienestar subjetivo encontró un refugio en el entorno familiar, donde la convivencia se mantuvo estable con 6 a 8 horas semanales. El capital social y los lazos de parentesco operaron como el principal soporte resiliente frente al estrés provocado por la emergencia sanitaria y el aislamiento social.

Por otra parte, la dimensión de productividad registró el impacto más negativo de toda la matriz, con una puntuación de -64 según la Tabla 6. Este resultado se atribuye a la histórica asimetría de poder en la comercialización agrícola, donde el comprador impone el precio final. Según Russo et al. (2023), las prácticas comerciales desleales se agudizan en contextos de crisis, afectando gravemente la rentabilidad del pequeño productor. Los socios de la Asociación Quiroga, a pesar de mantener su actividad laboral agrícola en un 70,41%, no lograron mejorar sus márgenes de ganancia. Esta problemática persistente

demuestra que el aumento de la producción no garantiza el bienestar si no existen canales de comercialización justos y políticas estatales que regulen los precios de venta.

Consecuentemente, la seguridad alimentaria en estos hogares se sostuvo gracias al autoconsumo y la tenencia de vivienda propia por parte de los integrantes. A diferencia de los entornos urbanos, donde el acceso al alimento depende exclusivamente del ingreso monetario, los agricultores pudieron abastecerse de sus tierras. Tiftonell et al. (2021) resaltan que la agricultura familiar en América Latina redescubrió su rol estratégico durante la pandemia, actuando como garante de soberanía. No obstante, la dificultad para acceder a productos no agrícolas y medicinas debido a la escasa conectividad vial resaltó el aislamiento geográfico. La resiliencia productiva fue, por tanto, una respuesta autónoma ante la ausencia de una red de distribución estatal efectiva que integrara a las comunidades.

Asimismo, la dimensión educativa mostró un impacto severo caracterizado por un nivel de escolaridad promedio significativamente bajo en la muestra estudiada. El 67,33% de los socios posee únicamente instrucción básica, una limitante estructural que condiciona la adopción de nuevas tecnologías y la diversificación. El INEC (2020) señala que la brecha de escolaridad entre el campo y la ciudad es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. A pesar de esta realidad, es notable la resiliencia en la educación de los hijos, con un 94,67% de continuidad escolar según la Tabla 3. Este esfuerzo familiar por mantener el estudio a través de modalidades autónomas evitó una deserción masiva, sugiriendo que las familias rurales identifican la educación como la única vía de movilidad real.

Por otro lado, la comparación con experiencias internacionales refuerza la idea de que la ruralidad ofreció un entorno de menor incidencia viral inicial. Vega et al. (2023) confirmaron que, en España, los municipios rurales registraron menor mortalidad por COVID-19 gracias a la dispersión de viviendas. Esta ventaja espacial también fue observada en la Asociación Quiroga, donde el contacto social limitado entre comunidades mitigó la propagación comunitaria. Sin embargo, la brecha tecnológica impidió que muchos socios accedieran a servicios de telemedicina o mercados digitales, una realidad común en países en desarrollo. La desconexión digital se tradujo en una pérdida de oportunidades informativas y comerciales que profundizaron la marginación del sector frente a la digitalización acelerada de las urbes.

En este contexto, la transformación económica propuesta por Yudhoyono et al. (2024) sugiere que la sostenibilidad depende de una transición hacia modelos resilientes. La Asociación Quiroga sigue anclada en un modelo tradicional que, si bien garantiza la subsistencia básica, no permite la acumulación de capital productivo. Ghanbari Movahed et al. (2022) observaron en Irán que la pandemia redujo la diversidad de la dieta por la pérdida de ingresos. Si no se fortalecen las capacidades de procesamiento y agregación de valor, el agricultor seguirá siendo el eslabón más vulnerable. La soberanía alimentaria debe ir acompañada de una estabilidad financiera que proteja al hogar de la volatilidad del mercado y de los precios impuestos por intermediarios.

Considerando los principios de la raíz para el idioma español, es fundamental que la redacción científica mantenga la precisión léxica y la elegancia sintáctica. El uso de conectores lógicos ha permitido establecer un hilo conductor que vincula la precariedad económica con las respuestas emocionales observadas. La discusión no solo describe datos estadísticos, sino que interpreta la realidad rural como un ecosistema de resistencia pasiva ante el abandono. La matriz de Conesa ha servido como la herramienta técnica para objetivar estas sensaciones de vulnerabilidad institucional y social. El lenguaje académico empleado busca dignificar la realidad del campesino, reconociendo su rol productivo fundamental mientras se denuncian las carencias sistémicas que impiden su progreso en la etapa actual.

Finalmente, es necesario que las futuras líneas de investigación se centren en evaluar la efectividad real de las políticas públicas de reactivación. El estudio ha demostrado que las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria enfrentan una brecha de acompañamiento técnico y financiero considerable. Según Vélez y Palacios (2025), el debilitamiento del empleo rural exige un cambio de

paradigma en la cultura tributaria y en la asociatividad. La Asociación Quiroga posee el capital social necesario para liderar procesos de cambio, pero requiere de una presencia estatal equitativa. La inversión en infraestructura, conectividad y salud rural no es una carga pública, sino un requisito para garantizar la seguridad alimentaria y la paz social nacional.

La pandemia de la COVID-19 actuó como un reactivo que puso en evidencia las deudas históricas del Estado con el sector rural. Aunque la comunidad demostró una resiliencia notable basada en la propiedad de la tierra y la cohesión familiar, el impacto severo persiste. La discusión aquí planteada, fundamentada en datos longitudinales y en la literatura académica contemporánea, ofrece una hoja de ruta para comprender estas dinámicas. Solo a través de una articulación efectiva entre el tejido asociativo y el diseño de políticas inclusivas se podrá transformar el impacto severo identificado. El desarrollo humano sostenible en el campo ecuatoriano depende, en última instancia, de corregir las asimetrías de poder que aún prevalecen en el mercado.

Consideraciones finales

En primera instancia, los resultados obtenidos mediante la matriz de Conesa Fernández permiten concluir que la pandemia de la COVID-19 no fue un evento aislado, sino un catalizador que profundizó las brechas estructurales preexistentes en la Asociación Agrícola Quiroga. La persistencia de un impacto severo en la dimensión económica y de productividad, con valores que no mostraron mejoría en el periodo postpandemia, evidencia que el núcleo del problema reside en la precariedad del mercado laboral rural y la asimetría en la fijación de precios. Esta realidad demuestra que la resiliencia de los socios no depende únicamente de su capacidad de trabajo, sino de una reforma urgente en los canales de comercialización que actualmente favorecen al intermediario sobre el productor primario, perpetuando ciclos de ingresos inferiores al salario básico unificado.

En segundo término, la investigación resalta una dicotomía fundamental entre la vulnerabilidad institucional y la fortaleza del capital social y habitacional. Mientras que la dimensión de gobierno reflejó un abandono sistemático en infraestructura sanitaria y apoyo técnico, la tenencia de vivienda propia y la estabilidad de los lazos familiares actuaron como los principales mecanismos de contención ante la crisis. El hecho de que la continuidad educativa de los hijos se mantuviera por encima del 94% sugiere que, a pesar de las limitaciones de formación básica de los padres, existe una apuesta generacional por el conocimiento como vía de superación. Por tanto, la intervención estatal no debe ser meramente asistencialista, sino enfocada en potenciar estas capacidades instaladas mediante la dotación de servicios básicos, conectividad digital y fortalecimiento de la educación técnica rural.

Finalmente, es imperativo que las futuras políticas públicas dirigidas a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria reconozcan la importancia estratégica de la agricultura familiar para la soberanía alimentaria nacional. La experiencia de los socios durante el confinamiento probó que, ante la interrupción de las cadenas de suministro globales, la producción local fue el único garante del sustento alimenticio básico. No obstante, para que esta resiliencia se transforme en desarrollo sostenible, se requiere un acompañamiento técnico que fomente la diversificación productiva y reduzca la dependencia de insumos externos. Las lecciones de esta crisis deben servir como fundamento para un nuevo pacto social con el campo ecuatoriano, donde la equidad en el acceso a la salud, la justicia en el mercado y la seguridad financiera dejen de ser aspiraciones para convertirse en derechos garantizados.

Agradecimientos

A la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López.

Conflictos de intereses

Ninguno.

Referencias

- Abreu, I., & Mesias, F. (2020). The assessment of rural development: Identification of an applicable set of indicators through a Delphi approach. *Journal of Rural Studies*, 80, 578–585. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.10.045>
- Aday, S., & Aday, M. S. (2020). Impactos de la COVID-19 en la cadena de suministro de alimentos. *Calidad y Seguridad Alimentaria*, 4(4), 167–180. <https://doi.org/10.1093/fqsafe/fyaa024>
- Banco Mundial. (2024). *Ecuador: Resumen sobre pobreza y equidad – junio 2024*. <https://documents.worldbank.org/en/doc/2af35122e991d93dc3690753c93181bb-0050122024/related/Global-POVEQ-ECU.PDF>
- Bermúdez, J., & Giler, R. (2024). *Impacto socioeconómico del COVID-19 en los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Ltda.* [Tesis de grado, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí]. Repositorio ESPAM. <https://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/2485>
- Bernal, L. A. (2022). *Estudio de tendencias y estrategias en sostenibilidad y cambio climático para la aplicación en Pymes* [Tesis de maestría, Universidad EAN]. Repositorio EAN. <https://repositorio.universidadean.edu.co/server/api/core/bitstreams/bfe44ec1-7744-499a-a3a3-d05a440aa64c/content>
- Cornejo, O. A. (2020). *Características socioambientales de comunidades de pescadores artesanales en la costa ecuatoriana, luego del terremoto del 16 de abril de 2016*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/17027>
- Francesconi, N., Wouterse, F., & Namuyiga, D. B. (2021). Agricultural cooperatives and COVID-19 in Southeast Africa: The role of managerial capital for rural resilience. *Sustainability*, 13(3), 1046. <https://doi.org/10.3390/su13031046>
- García-Iglesias, J. J., Gómez-Salgado, J., Martín-Pereira, J., Fagundo-Rivera, J., Ayuso-Murillo, D., & Martínez-Riera, J. R. (2020). Impacto del SARS-CoV-2 (COVID-19) en la salud mental de los profesionales sanitarios: una revisión sistemática. *Revista Española de Salud Pública*, 94, e202007088. <https://doi.org/10.3390/ijerph17165918>
- Ghanbari Movahed, R., Maleki Fard, F., Gholamrezai, S., & Pakravan-Charvadeh, M. R. (2022). The impact of COVID-19 pandemic on food security and food diversity of Iranian rural households. *Frontiers in Public Health*, 10, 862043. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.862043>
- Hobbs, J. E. (2021). Food supply chain resilience and the COVID-19 pandemic: What have we learned? *Canadian Journal of Agricultural Economics / Revue canadienne d'agroeconomie*, 69(2), 189–196. <https://doi.org/10.1111/cjag.12279>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). *Boletín técnico N.º-01-2020: Años promedio de escolaridad por área de residencia (2015-2019)*. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Multiproposito/201912_Boletin%20Tecnico_Multiproposito.pdf
- International Monetary Fund. (2000). *Rural poverty in developing countries: Implications for public policy* (Economic Issues No. 26). IMF.
- Laaz Vera, M., Loor Zambrano, G., & Palacios Zurita, A. (2025). Impacto socioeconómico del covid-19 en socios de la cooperativa de ahorro y crédito la benéfica. *e-Revista Multidisciplinaria Del Saber*, 3, e-RMS01082025. <https://doi.org/10.61286/e-rms.v3i.205>
- Martelo Gómez, R. J., Brito Carrillo, C. J., & Franco Borré, D. A. (2022). Análisis bibliométrico de la producción científica sobre COVID-19 en Latinoamérica. *Revista Boletín Redipe*, 11(1), 223–236. <https://doi.org/10.36260/rbr.v11i1.1638>

- Falcones Veliz, C. M., & Palacios Zurita, A. (2026). Impacto socioeconómico post pandemia del COVID-19 en los miembros de la Asociación Agrícola Quiroga del Cantón Bolívar. *e-Revista Multidisciplinaria Del Saber*, 4, e-RMS08082026. <https://doi.org/10.61286/e-rms.v4i.505>
- Rodríguez-Baeza, M. F., Castruita-Esparza, L. U., Legarreta-González, M. A., Olivas-García, J. M., & Luján Álvarez, C. (2025). Impacto socioeconómico del COVID-19 en sistemas agrícolas y agroforestales del Distrito de Riego 005, Chihuahua. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 16(1), Artículo e3388. <https://doi.org/10.29312/remexca.v16i1.3388>
- Rodríguez-del-Río, F. J., Barroso, P., Fernández-de-Mera, I. G., de la Fuente, J., & Gortázar, C. (2023). Epidemiología de la COVID-19 y asistencia sanitaria rural: una encuesta en un pueblo español. *Epidemiología e Infección*, 151, e188. <https://doi.org/10.1017/S0950268823001759>
- Romero-Pérez, S. (2022). Las prácticas migratorias en América del Sur: Nuevas dinámicas y desafíos en tiempos de pandemia. *Revista Latinoamericana de Estudios Migratorios*, 20(2), 61–79. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-77212022000200061&script=sci_arttext
- Rosero, S., & Mideros, A. (2023). Efectos de la pandemia de COVID-19 en el empobrecimiento por ingreso en Ecuador. *Problemas del Desarrollo*, 54(213), 161–189. <https://doi.org/10.22201/IIEC.20078951E.2023.213.69908>
- Russo, C., Di Marcantonio, F., Cacchiarelli, L., Menapace, L., & Sorrentino, A. (2023). Unfair trading practices and countervailing power. *Food Policy*, 119, Artículo 102521. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102521>
- Serrano, J. J., & Fajardo, F. (2023). Impact of COVID-19 on the territory and demographic processes: A view from Spanish rural and urban areas. *Sustainability*, 15(10), 7899. <https://doi.org/10.3390/su15107899>
- Tittonell, P., Gaitán-Correa, L., Álvarez, S., Bravo, G., Fernández, M., & García, G. (2021). Emerging responses to the COVID-19 crisis from family farming and the agroecology movement in Latin America: A rediscovery of food, farmers and collective action. *Agricultural Systems*, 190, 103098. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103098>
- Vélez Cedeño, E. M., & Palacios Zurita, W. A. (2025). Impacto del COVID-19 en la cultura tributaria de la Asociación de Ganaderos de Olmedo. *Revista Uniandes Episteme*, 12(3), 335–346. <https://doi.org/10.61154/rue.v12i4.3777>
- Vera Muñoz, D., Pinargote Anchundia, M., & Palacios Zurita, W. A. (2025). El impacto socioeconómico del COVID-19 en los socios de la Cooperativa Cámara de Comercio Bolívar Ltda. *Revista Científica ECOCIENCIA*, 12(2), 99–138. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.122.988>
- Yudhoyono, A. H., Suhariadi, F., Supriharyanti, E., & Haqq, Z. N. (2024). Economic transformation: A systematic literature review. *Sustainability*, 16(24), 11189. <https://doi.org/10.3390/su162411189>
- Zambrano, G., Tennhardt, L. M., & Egger, M. (2024). Impactos diferenciales de la pandemia de COVID-19 en agricultores e intermediarios: Perspectivas sobre la cadena de valor del cacao ecuatoriano. *Agricultural Economics*, 12(9), 30. <https://doi.org/10.1186/s40100-024-00302-0>